



## CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

VIRIATO, 52	28010 MADRID	914 44 49 20
PONZANO, 15	28010 MADRID	914 44 49 20
G. DE GRÀCIA, 171	08012 BARCELONA	934 15 09 88
ALBORAYA, 23	46010 VALENCIA	963 61 41 99

[www.cef.es](http://www.cef.es)

[info@cef.es](mailto:info@cef.es)

## Índice Tema 10

1. Las situaciones administrativas de los Funcionarios Públicos.
  - 1.1. Régimen jurídico.
  - 1.2. Clases.
    - 1.2.1. Servicio activo.
    - 1.2.2. Servicios especiales.
    - 1.2.3. Servicios en las Comunidades Autónomas.
    - 1.2.4. Expectativa de destino.
    - 1.2.5. Excedencia forzosa.
    - 1.2.6. Excedencia por cuidado de familiares.
    - 1.2.7. Excedencia voluntaria.
    - 1.2.8. Suspensión de funciones.
  - 1.3. Cambio de situaciones administrativas.
2. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias de los funcionarios.
  - 2.1. Retribuciones básicas.
  - 2.2. Retribuciones complementarias.
  - 2.3. Devengo de retribuciones.
  - 2.4. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.
  - 2.5. Retribuciones de los funcionarios interinos y del personal eventual.
3. La sindicación de los Funcionarios Públicos.
  - 3.1. Líneas directrices de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
  - 3.2. Excepciones y limitaciones para los funcionarios.
  - 3.3. Extensión de la libertad sindical.

- 3.4. El régimen jurídico sindical.
- 3.5. La representatividad sindical.
- 3.6. Requisitos para ostentar la «mayor representatividad».



## **CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS**

VIRIATO, 52	28010 MADRID	914 44 49 20
PONZANO, 15	28010 MADRID	914 44 49 20
G. DE GRÀCIA, 171	08012 BARCELONA	934 15 09 88
ALBORAYA, 23	46010 VALENCIA	963 61 41 99

www.cef.es

info@cef.es

### **TEMA 10**

**Situaciones administrativas de los funcionarios públicos. Retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios. La sindicación de los funcionarios públicos.**

#### **1. LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.**

##### **1.1. RÉGIMEN JURÍDICO.**

El régimen jurídico actual de las situaciones administrativas se encuentra en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, la Ley 30/1984, de 2 de agosto (arts. 11, 12 y 29 en la redacción que le otorga la Ley 22/1993, de 29 de diciembre), y en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, sobre situaciones de los funcionarios públicos.

##### **1.2. CLASES.**

Los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

- a) Servicio activo.
- b) Servicios especiales.
- c) Servicio en Comunidades Autónomas.
- d) Expectativa de destino.
- e) Excedencia forzosa.
- f) Excedencia por cuidado de familiares.
- g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
- h) Excedencia voluntaria por interés particular.



- i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
- j) Excedencia voluntaria incentivada.
- k) Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria.
- l) Suspensión de funciones.

### **1.2.1. Servicio activo.**

Los funcionarios se hallan en situación de servicio activo:

- a) Cuando desempeñen un puesto que, conforme a la correspondiente relación de puestos de trabajo, esté adscrito a los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- b) Cuando desempeñen puestos en las Corporaciones Locales o las Universidades Públicas, que puedan ser ocupados por los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- c) Cuando se encuentren en comisión de servicios.
- d) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su cuerpo o escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situación, conforme al artículo 29.2 i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su cuerpo o escala en Gabinetes de Delegados del Gobierno.
- e) Cuando presten servicios en las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto del personal de las mismas o en el Tribunal de Cuentas, y no les corresponda quedar en otra situación.
- f) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y, no percibiendo retribuciones periódicas por el desempeño de la función, opten por permanecer en esta situación, conforme al artículo 29.2 g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
- g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Corporaciones Locales, conforme al régimen previsto por el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las mismas.
- h) Cuando queden a disposición del Subsecretario, Director del Organismo Autónomo o Delegado del Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- i) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimiento de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.
- j) Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos.
- k) Cuando por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en organismos o entes públicos.
- l) En el supuesto de cesación progresiva de actividades.

### 1.2.2. Servicios especiales.

Los funcionarios públicos serán declarados en la situación de servicios especiales:

- a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en organismos internacionales, Gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
- b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.
- c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o altos cargos de las respectivas Administraciones Públicas que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos.
- d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.
- e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, o presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre.
- f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales.
- g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función.  
  
Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas Legislativas.
- h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales.
- i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su cuerpo y escala, en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por pasar a esta situación, conforme al artículo 29.2 i), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su cuerpo o escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado o Delegados del Gobierno.
- j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública.
- k) Cuando cumplan el servicio militar o prestación social sustitutoria equivalente.
- l) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.

m) Cuando ostenten la condición de comisionados parlamentarios de Comunidad Autónoma o adjuntos de éstos, según lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de colaboración y coordinación de las mismas.

n) Cuando así se determine en una norma con rango de ley.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispone que también pasarán a la situación de servicios especiales:

- Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos o Directores Generales.

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, añade que pasarán igualmente a la situación de servicios especiales:

- Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las provincias o Directores Insulares de la Administración General del Estado y no opten por permanecer en situación de servicio activo en su Administración de origen.

#### *1.2.2.1. Cargo de carácter político.*

Para declarar el pase a la situación de servicios especiales en el supuesto del apartado j) del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, será necesario haber sido nombrado para el desempeño en el sector público de un cargo de carácter político, entendiéndose por tal el cargo de confianza que no implique una relación profesional de carácter permanente, del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública y que, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Administraciones Públicas, conlleve responsabilidades directivas o asesoramiento a nivel político.

#### *1.2.2.2. Declaración de la situación de servicios especiales.*

1. El pase a la situación de servicios especiales se declarará de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto que la ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo.
2. En el supuesto previsto en el artículo 4.º a) del Real Decreto 364/1995, la autorización para realizar la misión de carácter internacional requerirá que conste el interés de la Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores.

#### *1.2.2.3. Reserva de puestos de trabajo.*

A los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales, procedentes de la situación de servicio activo, se les asignará, con ocasión del reingreso un puesto de trabajo, según los siguientes criterios y conforme al procedimiento que establezca el Ministerio de Administraciones Públicas:

- a) Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación, se les adjudicará, con carácter provisional, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio.
- b) En los restantes casos, se les adjudicará con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo Ministerio y municipio.

Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan el desempeño o reserva de puesto de trabajo, no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 23 del Real Decreto 364/1995.

#### *1.2.2.4. Efectos de la situación de servicios especiales.*

Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por el departamento en el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación de servicio activo.

Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al abono de la cuota de Seguridad Social, deberá ser efectuado dicho abono por el referido departamento.

A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación, a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos, así como a efectos del cómputo del período mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

#### *1.2.2.5. Solicitud de reingreso al servicio activo.*

Quienes pierdan la condición, en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situación de servicios especiales, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día en que perdieron aquella condición. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de solicitud del mismo cuando exista derecho a la reserva de puesto.

Los Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o del Parlamento Europeo que pierdan dicha condición, por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas, podrán permanecer en situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.

### **1.2.3. Servicios en las Comunidades Autónomas.**

#### *1.2.3.1. Funcionarios transferidos.*

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de las mismas y su situación administrativa es la de servicio activo en ellas.

En los cuerpos o escalas de la Administración del Estado de los que procedieran permanecerán en la situación administrativa especial de servicio en Comunidades Autónomas, que les permitirá mantener todos sus derechos como si se hallaran en servicio activo, de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

No obstante, la sanción de separación del servicio será acordada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del Consejo de Estado, sin perjuicio de los informes que previamente deban solicitar éstas de acuerdo con lo previsto en su legislación específica.

#### *1.2.3.2. Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos.*

Los funcionarios de la Administración del Estado que, mediante los sistemas de concurso, libre designación o reasignación de efectivos en los términos de los convenios que a tal efecto puedan suscribirse, pasen a ocupar puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas, se someterán al régimen estatutario y les será de aplicación la legislación en materia de función pública de la Comunidad Autónoma en que estén destinados, pero conservarán su condición de funcionarios de la Administración del Estado en la situación de servicio en Comunidades Autónomas.

En todo caso, les serán aplicables las normas relativas a promoción profesional, promoción interna, régimen retributivo, situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario de la Administración Pública en que se hallen destinados, con excepción de la sanción de separación del servicio, que se acordará por el Ministro del departamento al que esté adscrito el cuerpo o escala al que pertenezca el funcionario, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la Comunidad Autónoma de destino.

#### **1.2.4. Expectativa de destino.**

Los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos, que no hayan obtenido puesto en las dos primeras fases previstas en el apartado g) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasarán a la situación de expectativa de destino. Los funcionarios en expectativa de destino se adscribirán al Ministerio de Administraciones Públicas, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, pudiendo ser reasignados por éste en los términos establecidos en el mencionado artículo.

Los funcionarios permanecerán en esta situación un período máximo de un año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.

Los funcionarios en situación de expectativa de destino estarán obligados a aceptar los puestos de características similares a los que desempeñaban que se les ofrezcan en la provincia donde estaban destinados; a participar en los concursos para la provisión de puestos de trabajo adecuados a su cuerpo, escala o categoría que les sean notificados, situados en dichas provincias de destino, así como a participar en los cursos de capacitación a los que se les convoque, promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración Pública y los centros de formación reconocidos.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderán como puestos de similares características aquellos que guarden similitud en su forma de provisión y retribuciones respecto al que se venía desempeñando.

El incumplimiento de estas obligaciones determinará el pase a la situación de excedencia forzosa.

Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública efectuar la declaración y cese en esta situación administrativa y la gestión del personal afectado por la misma.

Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda, o en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50 por 100 del complemento específico que percibieran al pasar a esta situación.

A los restantes efectos, incluido el régimen de incompatibilidades, esta situación se equipara a la de servicio activo.



### 1.2.5. Excedencia forzosa.

La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas:

- a) Para los funcionarios en situación de expectativa de destino, por el transcurso del período máximo establecido para la misma, o por el incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- b) Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme, que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria, en los términos establecidos en el artículo 22 de este Reglamento.

En el supuesto contemplado en el párrafo a) del apartado anterior, el reingreso obligatorio deberá ser en puestos de características similares a las de los que desempeñaban los funcionarios afectados por el proceso de reasignación de efectivos. Estos funcionarios quedan obligados a participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan y a participar en los concursos para puestos adecuados a su cuerpo, escala o categoría, que les sean notificados.

Los restantes excedentes forzosos estarán obligados a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan y que les sean notificados, así como a aceptar el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos correspondientes a su cuerpo o escala.

El incumplimiento de las obligaciones recogidas en este artículo determinará el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Los excedentes forzosos no podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcional o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector, pasarán a la situación de excedencia voluntaria regulada en el apartado 3 a) del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, así como al cómputo del tiempo en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios.

Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública acordar la declaración de la excedencia forzosa prevista en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo y, en su caso, el pase a la excedencia voluntaria por interés particular y la excedencia voluntaria regulada en el apartado 3 a) del artículo 29 de la Ley 30/1984, de estos excedentes forzosos, así como la gestión del personal afectado.

La declaración de excedencia forzosa prevista en el párrafo b) del apartado 1 y, en su caso, la de excedencia voluntaria por interés particular o por prestación de otros servicios en el sector público de estos excedentes forzosos, corresponderá a los Departamentos Ministeriales en relación con los funcionarios de los cuerpos o escalas adscritos a los mismos, y a la Dirección General de la Función Pública en relación con los funcionarios de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio para las Administraciones Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

### **1.2.6. Excedencia por cuidado de familiares.**

Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será al puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución.

### **1.2.7. Excedencia voluntaria.**

#### *1.2.7.1. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.*

Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación regulada en este artículo, a los funcionarios que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben considerarse incluidas en el sector público aquellas empresas controladas por las Administraciones Públicas por cualquiera de los medios previstos en la legislación mercantil, y en las que la participación directa o indirecta de las citadas Administraciones Públicas, sea igual o superior al porcentaje legalmente establecido.

La declaración de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público procederá también en el caso de los funcionarios del Estado integrados en la función pública de las Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas de funcionarios propios de las mismas distintos a aquellos en que inicialmente se hubieran integrado.

Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese en ella, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

#### *1.2.7.2. Excedencia voluntaria por interés particular.*

La situación de excedencia voluntaria por interés particular se declarará a petición del funcionario, o de oficio, en los supuestos establecidos reglamentariamente.

Para solicitar la declaración de la situación de excedencia voluntaria por interés particular será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados.

También procederá declarar el pase a esta situación cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta de servicio activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso en el plazo reglamentario.

Los funcionarios públicos que presten servicio en organismos o entidades que queden excluidos de la consideración de sector público a los efectos de la declaración de excedencia voluntaria del artículo 29.3 a) de la LM, serán declarados en la situación de excedencia voluntaria del artículo 29.3 c) sin que les sean de aplicación los plazos de permanencia.

#### *1.2.7.3. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.*

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral, en cualquier Administración Pública, Organismo Autónomo, o Entidad Gestora de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del poder judicial.

Antes de finalizar el período de 15 años de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose, de no hacerlo, de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

#### *1.2.7.4. Excedencia voluntaria incentivada.*

Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases a que hace referencia el artículo 20.1 g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada.

Asimismo, quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación de un Plan de Empleo, tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha situación.

Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública acordar la declaración de esta situación.

La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcional o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Si no se solicita el reingreso al servicio activo dentro del mes siguiente al de la finalización del período aludido, el Departamento Ministerial al que esté adscrito el cuerpo o escala del funcionario le declarará en excedencia voluntaria por interés particular.

Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de 12 mensualidades.

#### *1.2.7.5. Efectos de la excedencia voluntaria.*

Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en ningún caso, reserva de puesto de trabajo y los funcionarios que se encuentren en las mismas no devengarán retribuciones, salvo lo previsto en el último apartado del epígrafe anterior. No será computable el tiempo permanecido en esta situación a efectos de promoción, trienios y derechos pasivos.

No obstante, se computará a efectos de trienios el período de prestación de servicios en organismos o entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones públicas.

#### *1.2.7.6. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria.*

Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de 3 meses, con un máximo de 18, el período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.

#### **1.2.8. Suspensión de funciones.**

La situación de suspensión de funciones podrá ser provisional o firme.

El funcionario declarado en suspensión firme de funciones deberá pasar a dicha situación en todos los cuerpos o escalas incluidos en el ámbito de aplicación de este reglamento a los que pertenezca, a cuyo fin el órgano que acuerde la declaración de esta situación deberá poner ésta en conocimiento de los Departamentos Ministeriales a que dichos cuerpos o escalas estén adscritos.

##### *1.2.8.1. Suspensión provisional.*

La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario.

Si durante la tramitación de un procedimiento judicial se decreta la prisión provisional de un funcionario u otras medidas que determinen la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo, se le declarará en suspensión provisional por el tiempo a que se extiendan dichas medidas.

La suspensión provisional como medida preventiva durante la tramitación de un expediente disciplinario podrá ser acordada por la autoridad que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo ex-

ceder esta suspensión de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75 por 100 de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como la totalidad de la prestación económica por hijo a cargo, excepto en caso de paralización del expediente imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización. Asimismo, no se acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento disciplinario o proceso penal.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.

#### *1.2.8.2. Suspensión firme.*

La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. La condena y la sanción determinarán la pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la suspensión firme no exceda de seis meses.

En tanto no transcurra el plazo de suspensión de funciones no procederá ningún cambio de situación administrativa.

El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de condena o sanción deberá solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión. Dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.

De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado en el párrafo anterior, se le declarará, de oficio, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción.

Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de seis meses, el funcionario será declarado, de oficio, en la situación de excedencia forzosa prevista en el artículo 13.1 b) con efectos de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.

### **1.3. CAMBIO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.**

Los cambios de situaciones administrativas deberán ser siempre comunicados al Registro Central de Personal y podrán tener lugar, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingreso previo al servicio activo.

En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda, y reservándoseles un puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido en el mismo Ministerio y localidad.

## 2. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS.

Los conceptos retributivos que vamos a estudiar se regulan en el artículo 23 de la Ley 30/1984, que tiene carácter básico. Uno de ellos retribuyen la pertenencia a la función pública, diferenciándose en virtud del Grupo de titulación al que pertenezca el Cuerpo o Escala y la mera antigüedad. Son las llamadas retribuciones básicas. Otros están ligados al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe (o al del grado personal del funcionario si es superior), a las características de dicho puesto y a la productividad del funcionario. La inclinación de la Ley 30/1984 por el sistema de empleo determina que estas últimas retribuciones sean de mayor cuantía (normalmente) que las anteriores. Por último, otro concepto retribuye servicios extraordinarios. Todas estas retribuciones distintas de las básicas se denominan complementarias. Aparte quedan las indemnizaciones por razón del servicio.

### 2.1. RETRIBUCIONES BÁSICAS.

Están integradas por el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.

A) El sueldo: es el que corresponde al Grupo en el que se encuentre clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario. El sueldo de los funcionarios del Grupo A no podrá exceder en más de tres veces al sueldo de los funcionarios del Grupo E.

B) Los trienios: consisten en una cantidad igual para cada Grupo por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala. En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes Cuerpos o Escalas de distinto Grupo de clasificación, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los Grupos anteriores. Cuando un funcionario cambie de adscripción a Grupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicio prestados en el nuevo Grupo.

Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable, en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, corresponda a las pagas extraordinarias.

La competencia para el reconocimiento de los trienios corresponde a los Subsecretarios de los Ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los Servicios Centrales de los mismos y de sus Organismos Autónomos y demás Entidades dependientes de los mismos, y a los Delegados del Gobierno y Subdelegados de Gobierno en relación a los funcionarios destinados en Servicios Periféricos de ámbito regional y provincial, respectivamente.

La Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, desarrollada por el Real Decreto 1461/1982, reconoce a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos o Escalas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración Pública.

El reconocimiento de servicios previos por Ley 70/1978 se efectúa a solicitud del interesado y la autoridad competente para llevarlo a cabo es el Subsecretario del Departamento en el que esté destinado el funcionario en el momento de presentar la solicitud.

C) Las pagas extraordinarias: serán dos al año por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios y el 40 por 100 del complemento de destino mensual. Su regulación concreta es la siguiente:

«Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derecho del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

- a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta y tres días, respectivamente.
- b) Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga extraordinaria, pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en el párrafo a) anterior.
- c) En el caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento o retiro de los funcionarios a que se refiere el apartado c) del artículo 34 de la presente ley, en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán como un mes completo.

A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo.

Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de funcionarios correspondientes a las pagas extraordinarias se reducirán, cualquiera que sea la fecha de su devengo, en la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse las mismas en cuantía proporcional al tiempo en que se ha permanecido en situación de servicio activo.

Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior correspondientes a los períodos de tiempo en que disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía.

## 2.2. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

Las retribuciones complementarias, de acuerdo también con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 30/1984, son las siguientes:

- a) El complemento de destino: es el que corresponde al nivel del puesto que se desempeñe.
- b) El complemento específico: retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad,

peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

- c) El complemento de productividad: es el destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

Cada Departamento Ministerial determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:

Primera. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.

Segunda. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

- d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal: en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.

Se concederán por los Departamentos Ministeriales u Organismos Autónomos, dentro de los créditos asignados a tal fin.

### 2.3. DEVENGO DE RETRIBUCIONES.

La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el funcionario realice una jornada inferior a la normal, la cuantía de sus retribuciones se determinará en la forma prevista en las normas dictadas para la aplicación del régimen retributivo a que esté sujeto.

Los funcionarios que realicen una jornada de trabajo disminuida en un tercio o en un medio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, experimentarán una reducción de un tercio o un medio, respectivamente, sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios.

Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, corresponda a las pagas extraordinarias.



Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:

- a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo, y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.
- b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.
- c) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado y, en general, a cualquier régimen de pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

## 2.4. RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS.

Según lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, los funcionarios en prácticas percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala en el que aspiren a ingresar. No obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones resultantes serán abonadas por el Departamento ministerial u organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo.

Ahora bien, los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos, contratados administrativos o como personal laboral, deberán optar al comienzo del período de prácticas o del curso selectivo por percibir, con cargo al Departamento ministerial u organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen entre:

- a) Las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, además de los trienios que tuvieran reconocidos.
- b) La que proceda conforme a lo señalado en el primer párrafo de este epígrafe, además de los trienios reconocidos. No obstante, si durante este período se desempeñara un puesto de trabajo como funcionario en prácticas, el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.

En todo caso, los funcionarios en prácticas, al finalizar el curso selectivo o el período de prácticas, deberán reincorporarse a su puesto de trabajo hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera en el nuevo Cuerpo o Escala.

Los funcionarios en prácticas que sean nombrados funcionarios de carrera al haber superado el período de prácticas o el curso selectivo, continuarán percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones que les hayan sido acreditadas durante el tiempo de realización de las prácticas o del curso selectivo.

La no superación del curso selectivo determinará el cese en el percibo de estas remuneraciones, sin perjuicio de su reanudación al producirse, en su caso, la incorporación del aspirante a un nuevo curso selectivo.

Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos de titulación inferior a aquel en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, se seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se computará dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servidos en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiriera la condición de funcionario de carrera en estos últimos.

## **2.5. RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS Y DEL PERSONAL EVENTUAL.**

Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, percibirán las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al Grupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que están vinculadas a la condición de funcionario de carrera.

El personal eventual regulado en el artículo 20.2 de la Ley 30/1984 percibirá las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al Grupo de asimilación en que el Ministerio de Administraciones Públicas clasifique sus funciones, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo reservado a personal eventual que desempeñe.

Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su Grupo de clasificación, incluidos trienios y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

El complemento de productividad podrá asignarse a los funcionarios interinos y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.

## **3. LA SINDICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.**

El movimiento sindical, surgido a fines del siglo XVIII y principios del XX como una respuesta de los trabajadores ante las condiciones laborales y sociales creadas en la naciente «revolución industrial», tardó aproximadamente un siglo en ser aceptado legalmente. Así, los sindicatos, tras atravesar fases históricas en las que estuvieron prohibidos y perseguidos penalmente o, en épocas posteriores, meramente tolerados, alcanzaron un pleno reconocimiento jurídico en los países civilizados de nuestro entorno a fines del siglo XIX, como, por ejemplo, en el Reino Unido en 1871, mediante «The Trade Union Act», o en Francia en 1884, a través de la promulgación de una Ley que autorizó legalmente los sindicatos obreros.

Sin embargo, el sindicalismo y la libertad sindical en el ámbito funcional tuvieron un reconocimiento social y político más tardío, debido a la persistencia de la tradicional «concepción estatutaria» de la relación funcional imperante en gran parte de los países europeos -enfoque que, incluso, aún

perdura en la Función Pública Alemana-, que configuraba a la misma como un vínculo de Derecho Público basado en principios de fidelidad mutua y corresponsabilidad administrativa, en el que el funcionario veía impuestas sus condiciones de trabajo por la decisión unilateral de la Administración. Pese a dicho inconveniente y una vez superada en parte la rígida concepción estatutaria clásica, la libertad sindical de los funcionarios públicos fue consagrada jurídicamente de manera casi universal con la adopción el 9 de julio de 1948 por la Organización Internacional del Trabajo de su Convenio número 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, aplicable tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los funcionarios públicos.

No obstante, en España las circunstancias políticas del antiguo régimen impidieron la ratificación de dicho Convenio y hubo que esperar hasta el mes de abril del año 1977, en pleno periodo de transición hacia la democracia, para que se implantase un sistema de libertad sindical, lo cual se produjo con la promulgación de una Ley preconstitucional pionera en este sentido -la Ley 19/1977, de 1 de abril- y con la asunción por parte de nuestro país de dicho Convenio, mediante Instrumento acordado el día 13 de dicho mes y publicado en el BOE el 11 de mayo de 1977. Desde tal implantación de la libertad sindical, el régimen jurídico de sindicación ha atravesado en España por dos etapas:

- 1.º Período inmediatamente anterior a la publicación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (de 1977 a 1985), con sindicación separada de trabajadores y funcionarios: antes de la publicación de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, existía una distinción entre «sindicatos de trabajadores», los cuales estaban regulados por la Ley 19/1977, de 1 de abril, y debían depositar sus Estatutos en el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación -IMAC- y «sindicatos de funcionarios», que estaban regidos por el Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio y efectuaban dicho depósito en la Dirección General de la Función Pública. Ambos tipos de sindicatos -aunque eran denominados eufemísticamente «asociaciones profesionales»- tenían el mismo régimen jurídico de libertad sindical, plenamente adaptado a los principios de la OIT.
- 2.º Período abierto por la publicación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (desde 1985), con sindicación unificada de trabajadores y funcionarios: con la promulgación de la citada Ley Orgánica 11/1985, se estableció el régimen actualmente vigente de libertad sindical, en el que ha desaparecido la dualidad de Oficinas para el depósito de Estatutos -implantándose una sola Oficina para tal depósito, dependiente de la autoridad laboral estatal o, en su caso, autonómica- y en el que los sindicatos pueden contar indistintamente con afiliados pertenecientes tanto al ámbito laboral como al funcional.

Tales principios de libertad sindical han sido elevados al rango constitucional y, así, el artículo 28.1 de nuestra Ley Fundamental, aplicable tanto a los trabajadores como a los funcionarios, establece que: «Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Instituciones armadas o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará la peculiaridad de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato». Hay que hacer constar que el legislador ordinario apenas ha hecho uso de la posibilidad establecida en dicho precepto de introducir peculiaridades para el ejercicio de la libertad sindical con respecto a los funcionarios y, así, éstos:

- 1.º Tienen estrictamente los mismos «derechos sindicales esenciales» (que son los contenidos en el mencionado artículo 28.1 de la CE) que los de los trabajadores por cuenta ajena, puesto que

el desarrollo de esta materia ha sido efectuado en un Cuerpo Legal común para ambos regímenes, como es la citada Ley Orgánica de Libertad Sindical.

- 2.º Cuentan con unos «derechos sindicales derivados» (derechos de huelga, negociación colectiva, participación institucional, etc.) equiparables a los de los trabajadores, puesto que algunos matices semánticos diferenciales en el sistema para la fijación de sus condiciones de trabajo respectivas -que para los trabajadores se califica nominalmente como «negociación colectiva» y para los funcionarios como «participación en la determinación de tales condiciones»- apenas se han traducido en distinciones sustanciales de fondo, especialmente tras las modificaciones introducidas por la Ley 7/1990, de 19 de julio, en la Ley 9/1987 (LOR), de 12 de junio, que prácticamente han equiparado la negociación colectiva en ambos sectores.

### 3.1. LÍNEAS DIRECTRICES DE LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD SINDICAL.

Las pautas básicas seguidas por el legislador en la citada Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, sobre Libertad Sindical, fueron las siguientes:

- 1.ª La unificación del régimen sindical de trabajadores y funcionarios, que rompe con la legislación anterior y es expresiva del carácter progresista e innovador de dicha Ley Orgánica. Así, su artículo 1.º señala: «1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. 2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas».
- 2.ª La delimitación clara entre sindicatos propiamente dichos y asociaciones profesionales. En efecto, la nueva Ley, acabando con el confusionismo terminológico de la anterior legislación, señala una diferenciación entre dichas asociaciones -dirigidas a proteger los intereses profesionales- y los sindicatos -instrumentos de autotutela organizada de los intereses de los trabajadores frente a sus empleadores-.
- 3.ª La exclusión de la regulación de las asociaciones empresariales, las cuales se siguen regulando por la Ley 19/1977, de 1 de abril.
- 4.ª La limitación de la aplicación de la Ley a los trabajadores por cuenta ajena en activo, recordando en parte los derechos sindicales de los trabajadores autónomos, los empleados y los pensionistas de jubilación o incapacidad, los cuales pueden afiliarse a los sindicatos, pero no pueden crear organizaciones para la defensa de sus intereses específicos.

### 3.2. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS.

Pese a ostentar una relación de carácter funcionarial, están exceptuados de su ámbito de aplicación o cuentan con unos derechos sindicales limitados, según lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 1.º de esta Ley Orgánica, los siguientes colectivos:

- 1.º Los miembros de las Fuerzas armadas y de los Institutos armados de carácter militar (en este último caso incluyendo a la Guardia Civil), los cuales tienen prohibida terminantemente cualquier forma de sindicación, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Constitución.

2.º Los Jueces, Magistrados y Fiscales, los cuales no pueden constituir sindicatos mientras estén en activo, conforme a lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución, pero pueden crear asociaciones profesionales con derechos sindicales restringidos, al amparo de las siguientes normas respectivas:

a) Para Jueces y Magistrados, el artículo 401 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

b) Para Fiscales, en los artículos 54 y 59 de la Ley 50/1981, del Estatuto del Ministerio Fiscal.

3.º Los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no tengan carácter militar, que -dado su carácter armado y su organización jerarquizada-, se regulan por su normativa específica, establecida en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

### 3.3. EXTENSIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL.

La libertad sindical comprende, según el artículo 2.º de la Ley 11/1985, de 2 de agosto, que desarrolla el contenido del artículo 28, apartado 1, de la Constitución, los siguientes derechos, que pueden ser clasificados en dos grandes grupos, uno relativo a los derechos sindicales de carácter individual de trabajadores y funcionarios y otro referente a los derechos de los propios sindicatos como tales entidades colectivas:

1.º Derechos sindicales individuales de los empleados:

a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.

b) El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.

c) El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical.

2.º Derechos sindicales colectivos de los Sindicatos:

a) Redactar sus estatutos y reglamentos, organizar su administración interna y sus actividades y formular su programa de acción.

b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas y retirarse de las mismas.

c) No ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes.

d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes.

### 3.4. EL RÉGIMEN JURÍDICO SINDICAL.

El régimen jurídico sindical establecido en el artículo 4 se caracteriza porque el sindicato adquiere plena personalidad jurídica y capacidad de obrar sin necesidad de autorización administrativa previa y de una forma automática, por el transcurso del período de 20 días desde el depósito de sus Estatutos en la Oficina Pública establecida al efecto, aunque tanto la Autoridad Pública como los interesados podrán promover ante la Autoridad Judicial la declaración de no conformidad a Derecho de tales Estatutos.

Las formalidades de tramitación que están establecidas en el mencionado artículo 4 pueden ser sintetizadas de la siguiente forma:

- 1.º Presentación de los Estatutos ante la Oficina Pública establecida al efecto, que en el pasado era el IMAC y en la actualidad, extinguido dicho organismo es, según el ámbito y la ubicación geográfica, la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las Direcciones Provinciales de dicho Departamento o las Oficinas que haya dispuesto la Comunidad Autónoma, cuando tales funciones hayan sido transferidas.
- 2.º Análisis de dichos Estatutos por la Oficina Pública, a la vista de la cual ésta deberá decidir entre estas dos actuaciones, según los casos:
  - a) Si no se observa ningún defecto formal (es decir, carencia de datos exigidos en el art. 4, apdo. 2), la Oficina Pública deberá disponer en el plazo de 10 días la publicación de tales Estatutos en el Boletín Oficial correspondiente y el Sindicato adquirirá personalidad jurídica a los 20 días desde la presentación de los Estatutos.
  - b) Si, por el contrario, se detecta alguno de los defectos formales mencionados, la Oficina Pública deberá recabar la subsanación de las mismas en el plazo de 10 días, subsanación que deberá producirse en el plazo de otros 10 días. Transcurrido este último período, la Oficina Pública, según los resultados de dichos trámites subsanatorios, dispondrá la publicidad de los Estatutos o rechazará el depósito de los mismos.

### 3.5. LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL.

Todos los sindicatos que se hayan constituido legalmente al amparo del artículo 4.º de esta Ley gozan de capacidad de obrar y, por lo tanto, de ejercer una acción sindical, pero la extensión de dicha facultad de actuación es variable según el grado de representatividad que se haya obtenido en los correspondientes procesos de elecciones sindicales.

En este sentido, determinadas prerrogativas de carácter institucional (en concreto, la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos, la promoción de elecciones sindicales y la participación institucional) se reservan a las organizaciones sindicales que tengan una cierta implantación, es decir, que hayan obtenido unos determinados porcentajes mínimos en dichas consultas electorales.

Dejando a un lado la participación institucional propiamente dicha, que cuenta con unos criterios de representatividad específicos, la acción sindical de carácter oficial e institucional para la negociación colectiva, la interposición de conflictos colectivos y la promoción de elecciones sindicales está asignada, en un determinado ámbito geográfico y funcional, a los siguientes sindicatos:

- 1.º A los «suficientemente representativos», es decir, a los que cuenten con un diez por ciento de los representantes en el citado ámbito concreto, según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
- 2.º A los que, aun sin contar con dicho porcentaje en el ámbito que se contemple, ostenten el carácter de «más representativos», bien «a nivel estatal», conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de la mencionada Ley Orgánica de Libertad Sindical (actualmente UGT y CC.OO.), que, por el fenómeno de la «irradiación» establecido en el artículo 6.3 de la LOLS, gozan de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales inferiores; o bien «a nivel de Comunidad Autónoma», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1, párrafo primero, de dicho Cuerpo Legal (actualmente sólo ELA-STV y CIG), los cuales también «irradian» su capacidad representativa en ámbitos inferiores (art. 7.1, párrafo segundo, de dicha Ley), aunque en este caso únicamente dentro de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Del análisis del expuesto sistema de representación del personal en las Administraciones Públicas, se extrae la conclusión de que el espíritu y la finalidad de la normativa sobre esta materia es establecer una representatividad de carácter «bifronte», en la que la representación de los sindicatos arraigados realmente en un concreto ámbito territorial y funcional resulta complementada legalmente con la representación otorgada a los sindicatos que tienen una cierta implantación de carácter general, aunque no gocen de audiencia alguna en el sector determinado que se contemple, todo ello con el fin de huir de dos extremos opuestos:

- a) Por una parte, el de evitar que resulte una negociación excesivamente atomizada y descoordinada entre las diversas unidades de negociación existentes.
- b) Por otra, el de superar una negociación de carácter desmedidamente genérico y abstracto en la que no se contemplen las peculiaridades reales de la representatividad y los intereses que se dan en cada uno de los ámbitos de negociación.

### 3.6. REQUISITOS PARA OSTENTAR LA «MAYOR REPRESENTATIVIDAD»

- 1.º A nivel estatal: según el artículo 6.2 a) de la Ley Orgánica mencionada, tendrán tal consideración los sindicatos «que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito, del 10 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los Comités de Empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas», es decir, calculando dicho porcentaje sobre el número global de representantes de todos los tipos de elecciones sindicales, sean éstas de trabajadores por cuenta ajena -de la empresa privada o de la Administraciones- o de funcionarios públicos.
- 2.º A nivel de Comunidad Autónoma: según el artículo 7.1 de la LOLS, tendrán tal carácter los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.



